

## Petróleo en Galicia y en Lanzarote

El accidente del petrolero *Exxon Valdez* frente a las costas de Alaska se produjo en 1991. Las secuelas ocasionadas por el vertido de crudo fueron de tal calibre que obligaron a gastar ingentes sumas de dinero durante los siguientes diez años para tratar de eliminar las huellas del desastre. La catástrofe ecológica llevó al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas drásticas para evitar que se repitieran accidentes de este tipo. Las disposiciones adoptadas han sido efectivas: no se ha vuelto a producir ningún accidente que provocara nuevos vertidos en las costas de aquel país.

Un año después, en 1992, la marea negra provocada por el buque *Mar Egeo* anegó las costas gallegas. Al contrario que en aquel país, en el nuestro no se arbitraron las medidas imprescindibles para evitar catástrofes de este tipo. Es más, no se tomó medida alguna. Y diez años después las costas de Galicia vuelven a ser contaminadas por las miles de toneladas de petróleo vertidas por el petrolero *Prestige*.

Desde el momento del accidente

se presentían consecuencias dramáticas. Las presagiaba cualquier observador mínimamente informado, salvo las autoridades gallegas y españolas competentes, que durante los primeros días trataron de alejar el peligro recurriendo al infantil mecanismo de ignorarlo.

Una vez confirmada la inevitabilidad de la catástrofe, la actuación de la Xunta de Galicia y del Gobierno español ha revelado tanto su ineficacia como la carencia de medios para combatir o disminuir las consecuencias de los vertidos. En palabras de un experto: "Las autoridades, una vez más, han estado dando palos de ciego y han estado paseando el petrolero accidentado *Prestige* por el noroeste, porque no sabían qué hacer con él. Por fin decidieron remolcarlo hasta alta mar, con lo que la mancha de combustible se hizo cada vez más grande, esparciendo 10.000 toneladas de fuel por casi 300 kilómetros de costa"\*.

Puede decirse, por lo tanto, que la actuación del Gobierno español ha alcanzado un nivel de incompetencia tal que no sólo no ha paliado las secuelas del accidente sino que las ha agravado notablemente. Pues bien, ese mismo gobierno ha sido el responsable –o el irresponsable– de autorizar las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Y es, obviamente, el mismo gobierno que garantiza que no existe riesgo de que las extracciones provoquen consecuencias medioambientales.

Es verdad que no existe *riesgo*, sino la absoluta certeza de que se producirán "consecuencias

***Las consecuencias medio-ambientales que niegan tanto el gobierno central como el de Canarias van a producirse***

\*Manuel Casal Pita, "¿Hasta cuándo más catástrofes ecológicas?", *El País*, 25 de noviembre de 2002.

*¿En caso de accidente, tendremos en Lanzarote los recursos humanos y los medios técnicos que no han tenido en Galicia?*

ambientales". Efectivamente, la duda no está en si se ocasionará o no contaminación, sino en cuál será la gravedad de la misma.

Extraer petróleo del mar es una actividad que provoca siempre contaminación: por las explosiones de los sondeos o la propia perforación; por los ácidos utilizados para perforar o por los lodos tóxicos que se generan; por los pequeños o por los grandes vertidos; por la limpieza de la plataforma o de los petroleros que arriban para transportar el material extraído; y un etcétera que es bastante largo.

A las costas de Lanzarote llegan restos del piche que dejan los petroleros al limpiar sus tanques a muchos cientos de kilómetros de distancia. Imaginemos lo que ocurrirá cuando esos petroleros se concentren a 27 kilómetros de la costa para cargar el crudo que se extraiga de los treinta pozos petrolíferos que anuncian.

Las consecuencias medioambientales y, por lo tanto, turísticas que niegan tanto el gobierno central como el de Canarias van a producirse. Y van a ser graves. Porque la Isla vive exclusivamente del turismo, de la comercialización de su costa y el aprovechamiento del clima. Resulta sencillo prever las secuelas ocasionadas por alguna noticia publicada en periódicos alemanes, ingleses o peninsulares sobre playas contaminadas por petróleo: disminución de la afluencia turística de forma inmediata y una imagen de destino turístico contaminado que perdurará en el tiempo.

Otra cuestión es si esas consecuencias pueden llegar a ser

catastróficas, en el caso de que un accidente provocara vertidos de tal magnitud que asolaran durante unos cuantos años la industria turística local. No es posible asegurar que ese accidente vaya a producirse; pero tampoco que no sucederá. La historia de la industria extractora de petróleo en el mar tiene ya cerca de un siglo, y los incidentes que han acarreado una seria contaminación del entorno constituyen un componente consustancial a esa actividad, que se ha repetido con la suficiente frecuencia como para que contemplar esa posibilidad sea más que razonable.

Y tras la reciente experiencia de lo sucedido en Galicia con los vertidos del *Prestige*, parece obligado preguntarse: ¿en caso de accidente grave, tendremos en Lanzarote o en Canarias los recursos humanos y los medios técnicos que no han tenido en Galicia?

Sólo se nos ocurre una respuesta a semejante interrogante: la necesidad de que se constituya una plataforma política y ciudadana en Lanzarote –que incluya partidos, sindicatos, empresarios y colectivos sociales– que pueda mostrar dentro y fuera de la Isla la radical oposición de la sociedad lanzaroteña a la instalación de esas plataformas petrolíferas.

La sociedad insular lleva años tratando de solucionar su gran conflicto ecológico: el desmesurado crecimiento turístico. Ahora tiene que hacer frente al otro gran problema ecológico que se anuncia antes de que se convierta en realidad. Y sólo una gran movilización unitaria en la Isla podrá evitar la amenaza inmediata que se cierne sobre Lanzarote.